



El entramado socio-político de las políticas sociales: temporalidades, escalas y actores

The sociopolitical framework of social policies: temporalities, scales and actors

Arnaud Trenta*

Palabras clave:

Acción pública
Políticas sociales
Análisis multiescalar
Temporalidad

Resumen

El dossier ofrece nueva evidencia empírica sobre las transformaciones de la acción pública y los modelos de política social que se pusieron en marcha en las últimas décadas, particularmente en el ámbito de la asistencia social. El enfoque privilegiado por las investigaciones puestas en diálogo procura ofrecer una visión multidimensional del fenómeno estatal e integra a una diversidad de agentes públicos y organizaciones sociales que intervienen en el armado y la puesta en práctica de las políticas sociales focalizadas en poblaciones y territorios específicos. De allí que la propuesta busca contribuir a la consolidación de un campo de estudios de la acción pública, que busca salir de una visión estado-céntrica estrecha para complejizarla a través de la articulación de diferentes escalas de análisis, de la conjunción de temporalidades que exhiban los procesos de institucionalización de las políticas, y de la incorporación de los usos y percepciones de los destinatarios.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IRES-Francia). Doctor en sociología por el Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Contacto: arnaudtrenta@hotmail.com

Keywords:

Public Action
Social Policies
Street-Level
Bureaucracy
Multiscale Analysis
Temporality

Abstract

The dossier offers new empirical evidence on the transformations of public action and the social policy models that were launched in recent decades, particularly in the field of social assistance. The selected approach for the investigations gathered seeks to offer a multidimensional vision of the state phenomenon and integrates a diversity of public agents and social organizations that intervene in the conception and implementation of social policies focused on specific populations and territories. Therefore, the proposal seeks to contribute to the consolidation of a field of public action studies, which seeks to go over a narrow state-centric vision to complex it through the articulation of different scales of analysis, the conjunction of temporalities that exhibit the institutionalization process of social policies, and the incorporation of the uses and perceptions of the recipient

A partir de los años 1970, el debilitamiento de la sociedad salarial y la crisis del Estado de Bienestar en las sociedades occidentales han abierto un proceso de reconfiguración del Estado social y sus formas de intervención por medio de políticas sociales.¹ Este cambio profundo ha sido interpretado a partir de varios conceptos como los de “Mixed economy of Welfare”² o de “État actif-providence”³ que vienen a subrayar la reducción del perímetro de intervención del Estado social y sus nuevas relaciones con las organizaciones de la sociedad civil. Bajo estos nuevos paradigmas, las políticas sociales han sido comprendidas como una configuración de relaciones complejas que mixturán una diversidad de organizaciones públicas y privadas dentro de las cuales las institucionales subnacionales y las organizaciones sociales juegan un rol

1 Rosanvallon, 1981; Esping-Andersen, 1990; Castel, 1995; Merklen, 2009.

2 Kamerman, 1983.

3 Rosanvallon, 1995.

fundamental en la definición e implementación de políticas locales, particularmente en los intersticios dejados por las medidas nacionales.

De este modo, durante los años 1980 y 1990, las organizaciones internacionales como los Estados latinoamericanos incentivaron el desarrollo de las llamadas ONG o “tercer sector”⁴, con el objetivo de fomentar intermediarios locales para la implementación de políticas de “lucha contra la pobreza”⁵. Este enfoque, más técnico que militante, fue resistido a fines de los años 1990 a partir del cuestionamiento al modelo neoliberal y de los crecientes bolsones de pobreza. Desde esa coyuntura, nuevos enfoques ganaron lugar en torno a las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales, los cuales se difundieron en los campos académicos, mediáticos y políticos. Particularmente, los conceptos de capital social,⁶ de empoderamiento⁷ y de economía social y solidaria⁸ conocieron en estos últimos años una importante circulación internacional entre América Latina, Europa y América del Norte y han orientado y modelado en cierto modo las políticas sociales. Todos esos conceptos apuntan al fortalecimiento de las capacidades de acción de las poblaciones vulnerables y sus organizaciones para resolver, por medio de la interacción con el Estado, la cuestión social desde una aproximación local y participativa.

En el caso de Argentina, la redefinición de la arquitectura institucional de las políticas sociales y el protagonismo de los intermediarios locales se visualiza particularmente a través del desarrollo de las políticas sociales focalizadas, muchas veces de corto plazo, destinadas a resolver necesidades específicas (alimentación, salud, vivienda) o distribuir ingresos monetarios alternativos al empleo.⁹ Estas políticas sociales se focalizan sobre poblaciones y territorios que conforman la nueva marginalidad de las sociedades postindustriales. Las mismas distribuyen recursos de bajo monto que pueden ser apropiados individual o colectivamente, e imponen una contraprestación (trabajo comunitario, capacitación, educación, cuidado,

4 Thompson, 1995; Roitter, González Bombal, 2000.

5 Prévôt-Schapira, 1996; Vommaro, 2011.

6 Putnam, 1995; Amaral, Stokes, 2005; Arriagada, 2005.

7 Afshar, 1998; Bacqué, Biewener, 2013.

8 Singer, 2002; Coraggio, 2011; Laville, 2013.

9 Falappa, Andrenacci, 2008.

etc.). A pesar de las crisis socio-económicas atravesadas por el país, de los distintos gobiernos de turno y del cambio en los paradigmas de las políticas sociales focalizadas durante las últimas cuatro décadas – del concepto de pobreza a aquellos de exclusión y desigualdad –¹⁰ se puede observar una cierta continuidad en torno a la reconfiguración del Estado social y la centralidad de las administraciones descentralizadas y las organizaciones sociales que conforman una *street-level burocracy* fundamental para la implementación de las políticas sociales.¹¹

Las “nuevas” políticas sociales

A partir de los años 2000 y del inicio del llamado “ciclo progresista”, la región latinoamericana se ha erigido en un verdadero laboratorio de políticas sociales que han tenido como objetivo la inclusión de poblaciones históricamente marginalizadas. Dos tipos de políticas sociales han tenido un desarrollo significativo en América latina y Argentina durante este periodo: el primer tipo privilegia transferencias monetarias condicionadas hacia “familias” en situación de pobreza o vulnerabilidad y el segundo tipo apunta a la inclusión de los “inempleables” por medio del trabajo en organizaciones sociales.

Respecto del primer tipo se observa en América Latina el aumento de las prestaciones monetarias no contributivas cuyos destinatarios privilegiados son “familias” en situación de pobreza o indigencia, y cuya contraprestación es de garantizar la escolarización y vacunación de los hijos e hijas. Las experiencias pioneras de los programas *Progresas* en México (1997) y *Bolsa Familia* en Brasil (2003) han popularizado este modelo de políticas sociales llamado *Condictional Cash Transfer Programs* (CCTP), el cual fue sostenido por las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.¹² En Argentina, bajo los efectos de la crisis económica, social y política de 2001, se produjo en 2002 la sustitución del *Plan Trabajar* por el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (JJHD), lo que abrió la vía a la masificación de este tipo de políticas públicas. El programa JJHD combinaba las con-

10 Kessler, 2014.

11 Lipsky, 1980; Dubois, 1999; Vommaro, 2019.

12 Ceballos y Lautier, 2013.

dicionalidades herederas del *Plan Trabajar*, como la realización de tareas comunitarias, con las condicionalidades más clásicas de los CCTP relacionadas con tareas de cuidado. Esta línea “familiarista” de las políticas sociales se autonomizó en 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner a través del programa Familia por la Inclusión Social, financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2009, frente a un contexto político y económico adverso tanto a nivel nacional (crisis del campo) como internacional (crisis financiera y fin del “boom” de los *commodities*), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a ampliar este modelo de políticas sociales a partir de la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que consolidó y amplificó las transferencias de ingreso condicionado hacia familias en situación de vulnerabilidad. Esta tendencia creciente hacia la universalización de las prestaciones familiares será prolongada en los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri a través de una nueva extensión de beneficiarios. Las políticas sociales, como por ejemplo la AUH, han sido gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sin intermediación de organizaciones sociales o gobiernos locales, aunque ciertos grupos o referentes hayan podido acompañar la demanda de los sujetos de derecho.

Respecto del segundo tipo de políticas sociales implementadas en América Latina, aquellas de transferencias monetarias condicionadas relacionadas con una contraprestación de tipo laboral han conocido un alto grado de ampliación y racionalización en Argentina, y en varios países de la región como Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, entre otros. Estas políticas sociales se integraron en un nuevo modelo de desarrollo social y productivo que articuló las distintas escalas del Estado con las organizaciones sociales radicadas en los territorios populares. En esta perspectiva, la Economía Social y Solidaria –en tanto categoría utilizada por los actores– adquirió una centralidad dentro de las políticas y prácticas de lucha contra las desigualdades en el Latinoamérica. En particular, el fomento del asociacionismo y cooperativismo, la capacitación de las poblaciones objeto de políticas y el mejoramiento de la tecnología productiva constituyeron las principales aristas de una matriz de desarrollo e inclusión social cuyo objetivo fue conjugar los distintos recursos que provenían del Estado, el mercado de trabajo y la solidaridad comunitaria.

Entre 2003 y 2015, bajo las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, varias organizaciones populares adquirieron un mayor protagonismo

en la implementación de este tipo de políticas sociales,¹³ a la vez que sus dirigentes formaron parte de la administración político-técnica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación¹⁴ y de ciertas administraciones provinciales como en el caso de Mendoza.¹⁵ Lejos de resumirse a una lógica clientelista,¹⁶ esta diversidad de organizaciones conformaron redes de solidaridad en los territorios populares, lo que exhibió la permanencia de un *Welfare Mix* aun en el contexto de una mayor intervención estatal. A partir de 2009, frente a la misma adversidad expuesta anteriormente, el gobierno nacional englobó un conjunto de dispositivos en el programa *Argentina Trabaja* con el objetivo de apoyar la creación y consolidación de las organizaciones de base, utilizando de manera explícita el vocablo de la Economía Social y Solidaria para exponer su proyecto político.

Estas políticas sociales que se inscribieron dentro del “giro productivo que busca absorber a la población asistida”,¹⁷ lograron un activo consenso entre las administraciones de distinto color político durante los últimos años, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Este consenso se manifestó a nivel nacional en el aumento de las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Desarrollo Social que, según las estimaciones, disponía durante el periodo kirchnerista de 4 millones de pesos en 2003, 172 millones en 2009 y 4400 millones en 2013 para incentivar el trabajo cooperativo y el autoempleo.¹⁸ Después de las elecciones de 2015, el gobierno de Mauricio Macri mantuvo estas políticas a través del *Plan Nacional de Economía Social Creer y Crear* cuyo objetivo era:

“(...)impulsar el desarrollo local y regional a través del fortalecimiento de la economía social, promoviendo proyectos socio-productivos como estrategia primordial

13 Merklen, 2009; Quirós, 2011; Pérez, Natalucci, 2012; Zarazaga, 2014; Trenta, 2017^a.

14 Perelmiter, 2016.

15 Trenta, 2017^b.

16 Vommaro, Combes, 2016.

17 Cortés, Kessler, 2013.

18 Hopp, 2017.

de inclusión social y productiva de personas en situación de vulnerabilidad social a través del otorgamiento de microcréditos, desarrollando iniciativas de capacitación y formación profesional y en oficios.”¹⁹

En el proyecto de ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional de 2017, y comparativamente con el de 2016, la dotación global del Ministerio de Desarrollo Social creció un 39% y los programas destinados a la economía social aumentaron casi un 50% para alcanzar los 16 000 millones de pesos (12% del presupuesto del Ministerio), cifras que superan la tasa de inflación y demuestran una continuidad de la acción pública en torno al fortalecimiento de la economía social.

De igual manera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO, que gobierna la ciudad desde 2007, elaboró políticas sociales en estrecha colaboración con las ONGs y las asociaciones territoriales implantadas en barrios populares.²⁰ En una provincia como la de Mendoza, el consenso interpartidario se manifestó a partir de 2012 con la sanción por unanimidad de una Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria, que reconoció el rol primordial de las organizaciones sociales en el proyecto de un desarrollo social inclusivo, otorgó financiamiento específico al sector y creó instancias de representación y regulación. En 2015, el gobierno de la provincia de Mendoza cambió de color político con la elección del candidato radical de Cambiemos, Alfredo Cornejo, en el ejecutivo provincial. A pesar de que la nueva administración fusionó el antiguo Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el nuevo Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, este gestiona los principales programas que tienen por objetivo la inclusión social, particularmente aquellos ligados a la promoción de la economía social, que han sido mantenidos por la nueva gestión. La continuidad de las políticas de inclusión a través del trabajo se manifestó en los presupuestos de los ministerios provinciales bajo distintos gobiernos, aunque no se dispone de información desagregada a nivel de programas específicos. En el proyecto de ley de presupuesto de Mendoza para 2015, se le asignaba un presupuesto global de 1052 millones de pesos al entonces

19 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2016, p. 6.

20 Vommaro y Moresi, 2015.

Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, cifra muy inferior a los 1625 millones de pesos para 2017 y 2160 millones para 2018 asignados solamente a la Subsecretaría de Desarrollo Social (a pesar de la alta inflación).

Sin embargo, el relativo consenso alcanzado sobre las políticas públicas de inclusión a través del trabajo no significa una homogeneidad en la manera de concebir la articulación de la acción pública con las organizaciones socio-productivas. Se puede distinguir dos grandes modelos divergentes de apoyo a la economía social: por un lado, un modelo social que privilegia a actores colectivos, como cooperativas y asociaciones, y que valoriza su potencial inclusivo hacia poblaciones alejadas del mercado de trabajo. Dentro de este modelo, se concibe a los actores de la economía social como portadores de cierta legitimidad para intervenir en el espacio público y participar de los procesos de co-construcción de políticas sociales. Por otro lado, un modelo liberal destinado a actores concebidos como individuos económicos, como los microemprendedores, cuyo objetivo es la autosostenibilidad de su actividad económica por medio de la integración en el mercado. En este sentido, las políticas apuntan a mejorar la productividad de los emprendedores por medio de su financiamiento a través de microcréditos y de técnicas como el marketing y las redes sociales. En el campo de las políticas sociales y la economía social y solidaria, estos dos modelos de desarrollo social están en disputa para orientar la acción pública en sus distintas escalas (nacional, provincial, municipal) y generan tensiones entre los actores involucrados en una diversidad de organizaciones sociales y estatales.

Temporalidades, escalas y actores de las políticas sociales

El cambio en la arquitectura de las políticas sociales y el auge de un nuevo paradigma de desarrollo social bajo la categoría de economía social y solidaria sugieren una serie de interrogantes que el dossier busca responder, con el objeto de comprender el diseño, la implementación y los usos de las políticas sociales focalizadas en poblaciones y territorios específicos: ¿Cómo se articulan las distintas escalas del Estado y qué vínculo tienen con las organizaciones implantadas en los territorios populares? ¿Quiénes deciden, y con qué criterios, a los beneficiarios de las políticas sociales? ¿Qué autonomía tienen las organizaciones sociales frente a las

instituciones políticas que financian los programas sociales? ¿Qué significado otorgan los beneficiarios a las políticas sociales y de qué forma se apropian de los bienes y servicios dispensados? Estos interrogantes ponen en evidencia la necesidad de articular los niveles de análisis macro, meso y micro para examinar el proceso de elaboración e implementación de las políticas sociales entendidas como un entramado complejo que moviliza a una pluralidad de actores estatales y sociales, tanto colectivos como individuales. El análisis multiescalar de la acción pública permite determinar los espacios claves en la producción de las políticas sociales, sus componentes cognitivos y principios de justificación, y sus lógicas de acción en la puesta en marcha de los programas en territorios específicos. Esta articulación de diferentes niveles de análisis se acompaña de una visión ampliada de los protagonistas de la acción pública que incluye a agentes del Estado, a intermediarios socio-políticos y los destinatarios, con el objeto de interpretar los procesos de apropiación, reformulación y uso de las políticas sociales. Esta aproximación de las políticas sociales impone también una incorporación de la perspectiva histórica para lograr un análisis procesual de los dispositivos y actores de la acción pública, lo que permite interrogar sobre las rupturas y continuidades de las políticas sociales a partir del proceso de su institucionalización y no en función del color político de los gobiernos de turno.

Cada uno de los artículos que conforman este dossier comparten a su manera esta matriz conceptual de la acción pública y ofrecen nuevos avances en torno a las temporalidades, las escalas y los actores de las políticas sociales. Aunque los tres textos tratan de la sociedad argentina post 2001 y se focalizan en ciudades en particular, el alcance de los resultados supera los límites espaciales y temporales. Las investigaciones reunidas contribuyen al debate internacional sobre las transformaciones del Estado social y participar de la estructuración de un campo de estudio específico en Argentina como en la región latinoamericana.²¹

En su artículo titulado “Prestaciones no contributivas en Argentina. Sobre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2000-2018)”, Gustavo Gammallo analiza la institución clave de las “nuevas” políticas sociales bajo un periodo relativamente extendido. Con una mirada puesta en las dimensiones organizacionales, presupuestarias y programáticas del Ministerio de

21 Barrault-Stella et al., 2019.

Desarrollo Social de la Nación, el autor busca comprender las modalidades y los alcances de las políticas de lucha contra la pobreza a través las transferencias de ingresos hacia las poblaciones excluidas del sistema de protección social contributivo. Como lo demuestra Gamallo, la permanencia de un mercado laboral segmentado combinado con altos niveles de pobreza durante las dos últimas décadas condicionó a los diferentes gobiernos nacionales. Estos fenómenos contribuyeron a producir una cierta continuidad en la institucionalización del Ministerio de Desarrollo Social y sobre las políticas de transferencias de ingresos condicionadas, particularmente los programas emblemáticos como la Asignación Universal por Hijo (gestionado por el ANSES) y Argentina Trabaja. A pesar de la centralidad adquirida por el ministerio en la estructura gubernamental y la consolidación de su presupuesto a través el tiempo, el autor subraya la escasez de los montos transferidos y el carácter no universal de estas políticas sociales que limitan sus alcances en términos de lucha contra la pobreza. Al poner el énfasis en la dimensión macro y en una temporalidad de mediano plazo, al artículo ofrece una visión sobre los efectos negativos del predominio de la “retórica de la emergencia” que orienta la acción pública hacia una gestión de lo inmediato focalizada sobre poblaciones vulnerables y esconde un debate más profundo sobre la condición salarial y los mecanismos socio-económicos de producción de las desigualdades.

El artículo de Martín Hornes y Agustín Salerno, que se titula “Interpretaciones sobre la cercanía estatal en las áreas socio-asistenciales de dos municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Sentidos, relaciones y prácticas de los funcionarios políticos, los burócratas de la calle y los sectores asistidos entre 2007 y 2015”, privilegia el juego de escalas para analizar los discursos y representaciones del conjunto de actores de las políticas sociales. La perspectiva histórica y la comparación de dos territorios contrastados como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el municipio de Avellaneda brindan evidencias empíricas sobre el consenso social que se construyó en los últimos años en torno al modo de acción del Estado y particularmente sobre la preocupación por una “cercanía” entre los gobiernos y los sectores asistidos. Para las autoridades del PRO en CABA, la idea de cercanía fue utilizada en el ámbito de las políticas sociales para diferenciarse de los “políticos profesionales” y construir una legitimidad vinculada a personalidades (femeninas) que tratan

de demostrar emoción y compasión. Con el análisis del trabajo cotidiano de los burócratas de la calle en CABA y Avellaneda, los autores ponen de relieve el cambio en las prácticas de los funcionarios que se manifiesta por medio de la presencia regular y sistemática en los barrios, pensada como vector del acercamiento de los gobiernos municipales con las poblaciones asistidas. En fin, el punto de vista de los destinatarios de las políticas sociales demuestra el trabajo realizado por aquellos que deben diferenciarse de otros posibles beneficiarios y demostrar su adecuación con las categorías de la acción pública. De este modo, participan también de la construcción imaginaria y práctica de la cercanía estatal con los supuestos titulares de derecho.

El dossier se cierra con el artículo de Fermín Martínez Ramírez, que lleva el título “Experiencia laboral en el programa Argentina Trabaja. Significaciones de los trabajadores en torno al ingreso y permanencia en cooperativas de Berisso, Ensenada y La Plata”. La investigación de Martínez Ramírez privilegia el enfoque micro para analizar los modos de apropiación de las políticas sociales por parte de los beneficiarios. Para lograr tal objetivo, el estudio se concentra en el programa *Argentina Trabaja* y diversifica la base empírica a partir del análisis de municipios, intermediarios y cooperativas. Si bien las normativas oficiales que provienen de la escala nacional deberían homogeneizar la puesta en marcha del programa en los diferentes territorios, el autor pone a la luz las diversas formas de tramitar el acceso a las cooperativas que se relacionan con una pluralidad de factores tales como el conocimiento de referentes barriales, la participación en organizaciones oficialistas, autonomistas u opositoras, la posesión de un saber técnico, la inscripción en listas de “planes sociales”, etc. El análisis destaca entonces el difícil acceso a las políticas sociales por parte de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y subraya la influencia de las características sociopolíticas de los intermediarios sobre la experiencia en las cooperativas (lugar de trabajo, herramientas a disposición, tipo de actividades, capacitación, vínculo con la política). A pesar de estos factores de diferenciación de las experiencias en las cooperativas *Argentina Trabaja*, el autor pone de relieve similitudes vinculadas con el uso del programa y el proceso de identificación. Lejos del discurso oficial sobre la creación de empleos genuinos, la percepción mayoritaria de los cooperativistas es aquella de una situación transitoria hacia un mejor trabajo que es valorada por la regularidad del ingreso, la capacitación en oficios y el vínculo

entre “compañeros”. La formación de una identidad colectiva positiva se logra por medio de un distanciamiento del programa Argentina Trabaja y de los intermediarios sociopolíticos que identifican con la relación de asistencia, a la vez que de una valorización de la dimensión laboral a través de la figura del compañero y de la cooperativa como colectivo de pertenencia.

De forma transversal y bajo una mirada de conjunto, el dossier ofrece nueva evidencia empírica sobre los modelos de política social que se pusieron en marcha en las últimas décadas, particularmente en el ámbito de la asistencia social. El enfoque privilegiado por estas investigaciones puestas en diálogo, procura ofrecer una visión multidimensional del fenómeno estatal e integra a una diversidad de actores sociales que intervinieron en el armado y la puesta en práctica de los dispositivos de políticas sociales. De allí que la propuesta busca contribuir a la consolidación de un campo de estudios de la acción pública, que busca salir de una visión estado-céntrica estrecha para complejizarla a través de la articulación de diferentes escalas de análisis, de la conjunción de temporalidades que exhiban los procesos de institucionalización de las políticas, y de la incorporación de los usos y percepciones de los destinatarios.

Fecha de recepción: 10 de junio de 2019

Fecha de aprobación: 18 de septiembre de 2019

Bibliografía

Afshar, H. (1998). *Women and Empowerment. Illustrations from the Third World*. Basingstoke: Macmillan.

Amaral, S. y Stokes, S. (2005). *Democracia local: Clientelismo, Capital Social e Innovación Política en la Argentina*. Tres de Febrero: Editorial UNTREF.

Arriagada, I. (2005). *Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza*. Santiago de Chile: CEPAL.

Bacqué, M-H. y Biewener, C. (2013). *L'empowerment, une pratique émancipatrice*. Paris: La Découverte.

Barrault-Stella, L.; Maillet A. y Vommaro, G. (2019), « Étudier les transformations de l'action publique en Amérique latine. De terrains « exotiques » à la fécondité conceptuelle d'enquêtes situées ». *Gouvernement et action publique*, 1, 9-34.

Castel, R. (1995). *Les métamorphoses de la question sociale*. Paris: Gallimard.

Ceballos, M. y Lautier, B. (2013). « Les CCTP en Amérique Latine. Entre modélisation internationale et conjonctures politiques nationales ». *Revue Tiers Monde*, 214, 219-245.

Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Quito: Abya-Yala.

Cortés, R y Kessler, G. (2013). Políticas, ideas y expertos en la cuestión social de la Argentina democrática (1983-2012). *Revista de Indias*, 257, 239-264.

Dubois, V. (1999). *La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère*. Paris: La Découverte.

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.

Falappa, F. y Andrenacci, L. (2008). *La política social de la Argentina democrática (1983-2008)*. Los Polvorines: UNGS.

Hopp, M. V. (2017). Políticas de promoción de la economía social en Argentina: desafíos para la construcción de una nueva institucionalidad. En J. L. Coraggio (comp.), *Miradas sobre la economía social y solidaria en América Latina* (pp. 19-61). Los Polvorines: UNGS Ediciones

Kamerman, S. (1983). The new mixed economy of Welfare: Public and private. *Social work*, 28, 5-10.

Kessler, G. (2014). *Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Laville, J.-L. (2013). *L'économie solidaire: Une perspective internationale*. Paris: Fayard.

Lipsky, M. (1980). *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russel Sage Foundation.

Merklen, D. (2009). *Quartiers populaires, quartiers politiques*. Paris: La Dispute.

Perelmiter, L. (2016). *Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino*. San Martín: Editorial Unsam.

Pérez, G. y Natalucci, A. (2012). *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*. Buenos Aires: Trilce.

Prévôt-Schapira, M.-F. (1996). Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994. *Revista Mexicana de Sociología*, 58(2), 73-94.

Putnam, R. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.

Quirós, J. (2011). *El porqué de los que van*. Buenos Aires: Antropofagia.

Roitter, M. y González Bombal, I. (2000). *Estudios sobre el sector sin fines de lucro en Argentina*. Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Rosanvallon, P. (1981). *La crise de l'État-providence*. Paris: Seuil.

Rosanvallon, P. (1995). *La nouvelle question sociale : repenser l'État-providence*. Paris: Seuil.

Singer, P. (2002). *Introdução a Economia Solidaria*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

Thompson, A. (1995). *Políticas públicas y sociedad civil en Argentina*, Documentos del CEDES, Buenos Aires, N°. 113.

Trenta, A. (2017a). *Políticas sociales y organizaciones populares en Argentina (2003-2011): mediación social y movilización política en los barrios periféricos de Buenos Aires*. *Caderno CRH*, 30(81), 523-538.

Trenta, A. (2017b). Desarrollo, inclusión y economía social y solidaria: nuevas configuraciones en la República Argentina y la provincia de Mendoza (2003-2017). *Cuyonomics. Investigaciones en Economía Regional*, 1, 73-89.

Vommaro, G. (2011). La pobreza en transición. El redescubrimiento de la pobreza y el tratamiento de la cuestión social en la Argentina de los 80. *Apuntes de Investigación del CECYP*, XIV/19, 45-73.

Vommaro, G. (2019). Une bureaucratie para-étatique mouvante. La production locale du Welfare des précaires en Argentine à l'ère du capitalisme postindustriel. *Gouvernement et action publique*, 1, 35-60.

Vommaro, G. y Morresi, S. (2015). *Hagamos equipo: PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina*. Los Polvorines: UNGS Ediciones.

Vommaro, G. y Combes, H. (2016). *El clientelismo Político, desde 1950 hasta nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Zarazaga, R. (2014). Política y necesidad en Programas de Transferencias Condicionadas: la Asignación Universal por Hijo y el Programa de Inclusión Social con Trabajo Argentina Trabaja. En C. Acuña, *El Estado en acción* (pp. 71-107). Buenos Aires: Siglo XXI.